

1985: ELECCIONES Y DEMOCRACIA

Por Carlos Martínez Assad

Este año coincide con el cincuentenario del inicio de la institucionalización política del Estado mexicano. En junio de 1935 el presidente Lázaro Cárdenas lograba imponerse a la influencia del callismo, fortalecía el presidencialismo y aseguraba una participación más amplia de la ciudadanía en los asuntos de la política.

El presidencialismo garantizó esa institucionalidad de la que también se benefició. El partido del Estado selló ese proceso y en un caso único en América Latina, contribuyó a mantener la estabilidad política. Ese partido no fue sólo el mediador privilegiado entre la sociedad y el Estado, fue también el espacio para los acuerdos políticos de los miembros del grupo gobernante.

En ese sentido fueron tan importantes las elecciones en las que se convocaban a los ciudadanos a participar, como la selección en el interior del partido oficial, actividad que con el tiempo pasó a formar parte del ritual necesario para la unificación de los políticos mexicanos del presidente de la República, a los diputados federales y locales, así como a los presidentes municipales. Sólo los senadores se mueven en un ámbito donde la sociedad participa en menor medida.

Ha sido creciente el interés por los procesos electorales en México y en parte se trata de uno de los aciertos de la reforma política. Antes de ella sólo hubo coyunturas electorales que generaron una fuerte expectación cuando estuvieron imbricados movimientos políticos de cierta amplitud como el almazanismo en 1940 y el henriquismo en 1952, movimientos que no en balde asumieron el nombre de quienes los promovieron y esa capacidad caudillesca encerraba su debilidad. En la vida política institucionalizada no había cabida para quienes veían al país en su etapa precardenista.





Foto: Rodolfo Lazoya

Los movimientos sociales de 1958 y de 1968 generaron también inquietud en la clase política; ante la politización de la sociedad, el Estado respondía con algunas medidas reformistas que finalmente tuvieron algún significado en ese camino hacia la democracia que tanto ha costado a este país. Luego de esas expresiones populares se propusieron cambios importantes en el nivel electoral creándose los diputados de partido en 1964 y proponiendo, luego de la explosión que conmovió a los estudiantes, la disminución de la edad para ejercer los derechos ciudadanos a los 18 años en 1970, y en 1973 reduciendo a 1.5% el índice que permitía a los partidos minoritarios tener hasta 25 representantes en la Cámara de Diputados.

El avance más sólido para alcanzar unas elecciones más vinculadas a un proceso de democratización del país, surge con la reforma política que permitirá la convivencia de diputados de mayoría y de representación proporcional. Se aceptó así que había que alentar la vida partidaria para evitar que el PRI cayera en un vacío institucional al no tener contendientes con los cuales alternar como sucedió en 1976 cuando el PAN, debido a crisis internas, no postuló candidato. Entonces el PCM medio salvó la situación al lanzar como candidato independiente a Valentín Campa.

Con el reconocimiento de varios partidos que alcanzaron su registro definitivo ante la Comisión Federal Electoral al participar en las elecciones legislativas de 1979, la primera

ocasión en que se ponía en práctica la LOPPE, los ciudadanos podían al fin escoger sobre diferentes opciones, lo que contribuyó a contrarrestar la pérdida de credibilidad en el sistema político mexicano. Pese a todo, los resultados de ese año no fueron tan espectaculares como se previó. En 1976 sólo habían votado 16 046 721 de los 29 788 308 ciudadanos que debían haberlo hecho, lo que significó un abstencionismo de 45%. En 1979 el abstencionismo creció, ya que apenas asistieron a las urnas 13 888 513 ciudadanos. Aunque no es posible comparar las elecciones presidenciales, a las que asisten más electores, con las elecciones legislativas, fue sintomático que en el marco de la reforma política con todas las expectativas que generó, la comparecencia en las urnas fuese tan escasa.

En 1982, en que contendían siete candidatos de diferentes partidos a la presidencia de la República, el interés por el proceso electoral aumentó. Más de veinte millones de ciudadanos votaron, lo más interesante es que se abatió la tendencia a la nutrida votación por el candidato priísta. Hasta entonces la votación más baja la mantenía el licenciado Adolfo Ruiz Cortines (74.31%), por la avalancha popular que se unió a la candidatura de Miguel Henríquez Guzmán, candidato de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. El licenciado Miguel de la Madrid triunfó con 71% de los votos, pero se había logrado que la ciudadanía participara en un juego más democrático al poder optar en un 29% por candidatos de otro partido que no fuera el PRI.

A partir de ese momento aparecen signos de ciertos cambios en la cultura política, en el comportamiento de los votantes y en las expectativas que aparecen en relación a las elecciones legislativas de 1985. Es cierto, sin embargo, que uno de los elementos que ha dinamizado el proceso desde hace un par de años es la beligerancia asumida por el PAN, hecho sin precedentes en la historia política del país.

Todo este nuevo proceso debe explicarse con más profundidad porque las elecciones de este año aparentan una trascendencia que hace pensar que al igual que en 1935, 1985 ocupará un lugar en la historia política del país.

La herencia pluripartidista

La tradición política parece insistir más en el deseo de un pluripartidismo, que en un esquema bipartidista que corresponde a la influencia directa del sistema que prevalece en Estados Unidos. La reforma política alentó ese amplio espectro toda vez que de pronto la ciudadanía se enteró de la



Foto: Rodolfo Lazoya

existencia de varios partidos que aún en 1982 no conocía cabalmente. Ese espectro, sin embargo, tiende a aumentar, y en este año aparecerán en las boletas electorales otros partidos. Pese a todo, la verdadera lucha contra la hegemonía del PRI la está dando un solo partido: el PAN. Sólo en las elecciones de 1982, ese partido reunió más de la mitad de los votos que obtuvo la gama de los partidos de oposición, alcanzando 50 diputados de representación proporcional de los cien que la LOPPE permite en esa fórmula. El incremento fue de 11 diputados en relación con 1979 cuando obtuvo 39 legisladores. No obstante, disminuyó el número de diputados de mayoría relativa; mientras que en 1979 triunfó en cuatro distritos electorales, en 1982 sólo triunfó en uno.

La tendencia al aumento de la votación panista no es reciente, data de cuando menos diez años atrás, con la única salvedad de 1976, cuando no postuló candidato a la presidencia de la República. En diez años no logró un aumento significativo en términos proporcionales, pues apenas pasó de 14.70% en 1973 a 16.43% en 1982, aunque en números absolutos aumentó notoriamente su votación, al pasar de 2 207 069 a 3 700 045 sufragios en 1982, lo que representó un aumento de más de un millón de votos.

En las elecciones de 1983 el avance cualitativo del PAN estuvo asociado a las victorias en varias plazas importantes del norte del país, como la de Ciudad Juárez, uno de los siete municipios más codiciados del país. Se dice que en Chihuahua algo así como 60% de la población vive en los municipios panistas, lo que unido al avance de Acción Nacional en otros estados del norte perfila lo que podría llamarse la frontera de la hegemonía del PRI.

Es en verdad una lucha por la hegemonía lo que puede definir en estos momentos la situación política en el norte del país, en esa extensa y rica región compuesta por los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Sinaloa. Algunas tendencias observadas en los procesos electorales de los últimos años hacen coincidir en esas entidades los mayores índices de abstencionismo y una de las caídas más precipitadas del voto priísta.

El año más dramático es 1979, primera ocasión en que se aplica la LOPPE en una elección federal y la mitad del camino del periodo presidencial del presidente José López Portillo. En Sonora y Sinaloa el abstencionismo estuvo por arriba de 70%, en Coahuila y Tamaulipas superó 60% y en Chihuahua alcanzó exactamente ese porcentaje. El asunto se vuelve más delicado si se recuerda que las cifras son oficiales y que difícilmente puede calcularse el abstencionismo en relación a la población en edad de votar; los datos se obtienen de la relación entre la votación total y las opciones de los empadronados.

En general las cifras son menos alarmantes en elecciones presidenciales cuando la población se involucra más en el proceso electoral, dando al presidencialismo el peso verdadero que ocupa en la estructura de la política mexicana. La tendencia que indica que se vota más en las elecciones presidenciales está completamente demostrada. La aceptación implícita del centralismo es notable porque la población prefiere votar por la autoridad más alejada, pero que en última instancia es la que le resuelve sus problemas, que por sus representantes en el nivel más próximo como son los diputados locales e incluso los presidentes municipales, con algunas excepciones más recientes (Juchitán, por ejemplo), que permiten prever algunos cambios en esa actitud.



Foto: Rodolfo Lazoya

En las entidades norteñas se han dado también los índices de mayor decremento del voto priísta. Entre 1973 y 1982 Sonora tiene el récord con -3.12% , le sigue Coahuila con -2.69% , Chihuahua con -1.78% . De los estados del norte del país el PRI sólo mantuvo índices de crecimiento para ese periodo en Nuevo León (0.40) y en Sinaloa (0.13), muy bajos por cierto, y que revelan su caída en todo el país. Lo que se explica no sólo por el incremento del voto panista, sino también por las diversas opciones que se le presentaron a la ciudadanía con la participación de otros partidos políticos.

Junto a las cifras que con frialdad muestran el deterioro del voto priísta y el avance del panismo en el norte del país, se da igualmente la definición de nuevos actores sociales, nuevos porque asumen posturas en el actual escenario político, pero bastante identificados en la historia de México. El clero más tradicional, los empresarios más apocalípticos y el gobierno norteamericano más interesado que nunca en intervenir en los asuntos de la política interior de México, delinear el escenario de las elecciones de 1985.

Han sido numerosas las declaraciones realizadas por miembros de la alta jerarquía eclesiástica que van desde las posturas más decididamente políticas, hasta aquellas que se pretenden neutrales; ambas coinciden casi necesariamente en el respeto del voto, aunque revelan en forma implícita una crítica al sistema político y una coincidencia con los poco imaginativos postulados del PAN. Se dice que el obispo de Sonora, Carlos Quintero Arce, participó en la famosa reunión de Hermosillo del 22 de abril de 1983, donde coincidió

ron representantes de la embajada norteamericana y el candidato a gobernador del PAN en ese estado, momento que marca las nuevas formas que ha asumido la participación electoral.

Evangelizar con la política

Por su parte, el arzobispo de Chihuahua, Adalberto Almeida y Merino, hizo publicar un folleto titulado *Votar con responsabilidad. Una orientación cristiana*, con fecha 15 de mayo de 1983, en que pedía a "...los sacerdotes que ayuden a los votantes a reflexionar cuidadosamente" sobre el contenido del opúsculo. Uno de los puntos más interesantes es la respuesta que se da a la pregunta ¿Puede la Iglesia participar en política? "La Iglesia, (respondía) siente como un deber y derecho estar presente en este campo de la realidad (la actividad política): porque el cristiano debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida la dimensión política. La necesidad de la presencia de la Iglesia en lo político proviene de lo más íntimo de la fe cristiana: del señorío de Cristo, que se extiende a toda la vida".

Es inusitada la carta pastoral que los obispos de la República mexicana dieron a conocer en la ciudad de México el 25 de abril de este año, dedicada a orientar a los cristianos a propósito de las elecciones. En lo que parece ya una postura generalizada por la jerarquía, se define a la política en dos acepciones, una amplia, vinculada "al bienestar general de la sociedad y que abarca lo correspondiente a los valores fundamentales de la comunidad" y otra restringida a la "acción de

grupos ciudadanos que se proponen conseguir y ejercer el poder público... es la llamada política de partido".

Aunque los esfuerzos por mantener la imparcialidad del documento son dignos de encomio, las sutilezas no forman parte del lenguaje que habla el clero regular y puede prestarse a la interpretación más conservadora y decididamente militante, expresados en la forma como el PAN ha capitalizado dichas concepciones. Así, la Iglesia católica no se manifiesta por ningún partido en particular "... pero si los de la izquierda, basados en el marxismo, rechazan la existencia de Dios, el alma y la eternidad, no podemos sugerir que se vote por ellos, porque hay un error respecto a la concepción del hombre", expresó el arcipreste de la Basílica de Guadalupe, Carlos Warnholtz, el 17 de junio de 1985.

La participación de los empresarios, por su parte, ha sido embozada y sin dejar abiertas distintas opciones, no descuidan las posiciones ganadas en el interior del PRI y del propio aparato estatal, pero se lanzan con voracidad a una lucha más decidida por el poder.

Lo que mantiene divididos a los diferentes grupos de empresarios es, en algunos casos, el resentimiento acumulado frente al Estado y, en otros, los privilegios a los que han tenido acceso por las coincidencias con la clase gobernante. Unos y otros se han beneficiado del desarrollo de un país que ha estado al servicio de sus intereses, de sus inversiones y, en momentos más recientes, de las especulaciones que han contribuido a la crisis económica por la que atraviesa la sociedad mexicana. Un caso concreto, el licenciado Alfonso Martínez Domínguez en Nuevo León concilió los diferentes



Foto: Rodolfo Lozoya

grupos empresariales que encontró hostiles y divididos cuando asumió la gubernatura hace seis años. Con su gestión restauró el orgullo del empresario neoleonés, aun en momentos de graves dificultades para los grupos más poderosos de la entidad. Identificado plenamente con el empresario, Martínez Domínguez se mantuvo con disciplina dentro de la corriente más conservadora del PRI.

En lo que concierne a la postura del gobierno norteamericano y su representante en México, vuelve por sus antiguos fueros y con el alarde y la prepotencia con que los medios masivos de comunicación fomentan en el vecino país el orgullo de ser norteamericano y reaganista, inicia una campaña a todas luces desprestigiante para México y de tono francamente beligerante. Por supuesto, no se trata de pura ideología, se orienta más bien a bloquear cualquier ayuda a Nicaragua, boicotear la acción de Contadora y el liderazgo que, de alguna manera, México está ejerciendo respecto a América Latina.

Vienen los panistas

Aunque la finalidad de este breve texto es aportar algunas ideas sobre las perspectivas electorales de los procesos de este año, el avance y las estrategias asumidas por el PAN hacen que este partido ocupe necesariamente un lugar central en el análisis. Las alianzas que se han mencionado coinciden con las estrategias políticas que asume ese partido al proponer reformas a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que destaca el 3o.

Quizás en donde los panistas han puesto mayor insistencia es en la libertad de enseñanza, como ellos la entienden. El artículo 3o. ha sido fuente de continuos conflictos entre la Iglesia y el Estado y asumiendo la tradición del conservadurismo mexicano, el PAN insiste en que la educación no debe ser monopolizada por el Estado. Se entiende que su planteamiento llevaría a la propuesta de una incidencia mayor del clero en la educación privada.

Es con base en este planteamiento que el PAN ha encontrado uno de los fundamentos de sus campañas electorales. En el centro del país es fácil identificar a los votantes panistas por un letrero que suele adherirse en algún lugar visible de los automóviles con la leyenda "libertad de enseñanza". Principio al parecer muy cercano a los que defienden las clases medias, sector en el que Acción Nacional encuentra sus principales núcleos de simpatizantes.

Cuestión que se vincula, además, a la concepción de familia que esgrime Acción Nacional. Para este partido, la familia es la unidad básica de la sociedad, por lo cual decide manifestarse por su protección proponiendo que se legisle no sólo por la defensa de sus derechos sociales, sino también por la preservación de la moral familiar, para lo cual llegó a señalar medidas concretas en contra de la pornografía.

Puede decirse que el PAN mantiene una ideología claramente conservadora, coincidente con los planteamientos del sector más de derecha del empresariado y con el clero que, aunque pretende participar en política, es todavía reticente a aceptar el cambio que se ha operado en la sociedad.

Aunque distinto, el actual PAN conserva algunos de los rasgos que coincidieron con su nacimiento. Su fundador, Manuel Gómez Morín, argumentaba que su partido era producto de la "repugnancia" que el desorden de las medi-



das gubernamentales provocaba. Se manifestaba por la salvaguarda de los derechos y de las libertades individuales. La libertad de enseñanza, el derecho de propiedad y la libertad de creencia han sido elementos de movilización en la historia de este país y no ha sido el PAN su único defensor, pero sí el más sistemático. Entre sus nuevas razones para actuar se declara en pro de la democratización, para lo cual deben hacerse a un lado la corrupción y el fraude electoral.

Para quienes plantean el bipartidismo en México como la opción política real que llevará al país a la verdadera democracia, el PAN es concebido como el único contendiente electoral de importancia al partido oficial. Para quienes la democracia se vincula a una acción pluripartidista, el PAN no es sino otro organismo político que participa en el juego electoral, en ocasiones haciendo componendas con el PRI para frenar el avance de la izquierda.

Lo cierto es que en este año de elecciones, el PAN aparece como una alternativa que disputa, en medio de exacerbadas controversias, la hegemonía priista tanto en el nivel de las diputaciones, como en las gubernaturas del norte, en particular las de Sonora y Nuevo León. Pero ¿tendrá el PAN la capacidad para hacer participar a sus afiliados y simpatizantes con la madurez que requiere el momento actual y asumir la responsabilidad de los partidos que se empeñan en la reafirmación de un sistema democrático?

Esta es una de las preguntas a las que la jornada electoral del 7 de julio de 1985 dará respuesta. Los efectos de la crisis probablemente influirán en el ánimo de los votantes que con

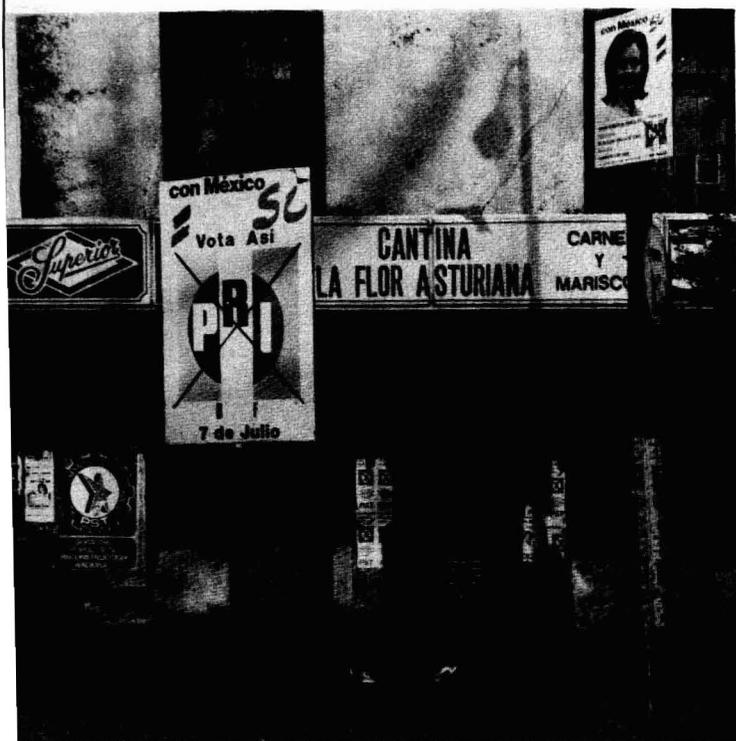


Foto: Rodolfo Lozoya

un voto antiPRI pueden alinearse al voto panista o al de la izquierda que estas próximas elecciones encuentran dividida. El PSUM disminuyó su votación, en términos proporcionales, pero aumentó en términos absolutos al pasar de 690 537 en 1979, a 905 058 en 1982.

En ese último año el PRT alcanzó el promedio necesario para conservar el registro definitivo y en las próximas elecciones intervendrá el PMT, que ha realizado una campaña amplia como grupo de opinión, lo cual puede acarrearle un buen número de votos ahora que se lanza a la contienda partidista.

En fin, pese a que el escenario no es tan favorable a la izquierda, puede mantener el porcentaje alcanzado hace tres años. Las estadísticas y las proyecciones se inclinan más por el avance de la derecha, la del PAN y la del PDM, en momentos críticos en que esta tendencia se beneficia no solamente en México sino también en el ámbito internacional.

La experiencia electoral reciente donde caben tanto los triunfos panistas en el norte del país como la presencia aún reducida de la izquierda, pondrá a prueba la capacidad de un sistema que invoca la democracia como la vía para evitar mayores autoritarismos y para enfrentar de la mejor manera la crisis en la que el país cayó vertiginosamente. La democracia no se logra exclusivamente a través de las elecciones aunque el respeto al voto y a la multiplicidad de opciones políticas, es uno de los medios.

Post scriptum

Otra jornada electoral ha terminado y no parecen haberse cimbrado los cimientos del sistema político mexicano. Los resultados fueron sorprendentes más por el abatimiento de las ideas sobre las elecciones, que por los resultados en sí.

El abstencionismo mostró una vez más no sólo la apatía del pueblo, sino el escaso impacto de una campaña política con costo de varios millones de pesos. Si se acepta que en este año de 1985 los no votantes se reunieron en un porcentaje de casi 50%, significa que algo así como diecisiete millones

de mexicanos no votaron. Estos datos sólo son comparables a los de 1973, antes de la reforma política.

Las elecciones legislativas, sin embargo, no se localizan entre las cuestiones políticas que más interesan a los mexicanos. Las cifras han demostrado en los últimos diez años que los ciudadanos dan una importancia mayor a las elecciones presidenciales.

El asunto debe preocupar porque demuestra que los sistemas de mediación que ha desarrollado el Estado mexicano no son los más acordes con las prácticas cotidianas. Las funciones de los legisladores, si se toman en cuenta los datos electorales, no son conocidas por los electores o no creen en ellas. Si la primera respuesta fuese la adecuada, sería imputable al sistema político —incluidos los partidos— no haber sabido darla a conocer. Si el problema fuese la pérdida de credibilidad de los ciudadanos sobre sus representantes, los diputados tendrían que revisar los principios constitucionales que explican sus funciones y convertirse en canales de transmisión entre el pueblo y el gobierno.

La democracia es más vulnerable cuando la participación social disminuye y no hay que olvidar que las elecciones legislativas son algo así como el referéndum a la política que realiza cada gobierno o, al menos, como una práctica que, por realizarse a la mitad de cada sexenio, podría ser considerada un aval de la primera mitad del camino.

Los resultados de la votación en 1985 no fueron tampoco tan sorprendentes respecto a los partidos, más bien continúan las tendencias que se habían venido observando.

El PAN conservó su lugar en lo que ha dado en llamar segunda fuerza política. Luego de una campaña que sostuvo una beligerancia permanente, apenas alcanzó dos millones y medio de votos, cifra que no supera la de 1982, pero sí las anteriores. El PRI con más de once millones de sufragios conserva la mayoría, pero reduce su participación en la Cámara de Diputados, ante los ocho diputados de mayoría relativa que obtienen el PAN (6) y el PARM (2). Aquí no pueden dejar de señalarse las diferencias de un sistema partidario que permite que un partido como el PARM que ya había perdido su registro en las elecciones pasadas y que no tiene carácter nacional (su votación se circunscribe al estado de Tamaulipas) pueda estar sobrerrepresentado en el Congreso de la Unión.

El PSUM se mantuvo como tercera fuerza con pérdidas que resultan muy notorias en el partido que representa a la izquierda más orgánica del país.

El PDM, por su parte, mantiene el ritmo de crecimiento más elevado de los nuevos partidos, lo cual lo prefigura como uno de los partidos que con el tiempo puede influir de manera más decidida en política por la defensa de los intereses más conservadores.

El PST y el PPS mantienen su registro y confirman su lugar como satélites del PRI. El PMT alcanza su reconocimiento como partido al obtener más del 1.5% de la votación total y el PRT se encuentra en entredicho.

Los nuevos alineamientos por el momento siguen favoreciendo a la derecha, aunque el PRI mantiene su hegemonía, aun en los estados del norte donde el PAN ha incidido en forma más definitiva. Los resultados electorales pueden equivocarse, pero difícilmente el pueblo puede aceptar que otros decidan por él. La participación amplia de la sociedad en la vida política es la única garantía para acceder a una democracia más plena. ◇